



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA LABORAL

Medellín, marzo 27 de 2023

Radicado: 05088 31 05 001 2022-00166 01  
Accionante: JOSÉ JAVIER ECHAVARRÍA LOPERA  
Demandado: WILSON HERNANDO ZULUAGA ARISTIZABAL  
Asunto: PROCESO EJECUTIVO – MANDAMIENTO DE PAGO

La Sala Sexta de Decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y la Dra. ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir la providencia dentro del proceso ejecutivo laboral de la referencia. Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se genera la decisión.

**ANTECEDENTES**

A través de la vía ejecutiva la parte accionante pretende la satisfacción de las condenas emitidas en el proceso ordinario laboral de radicado 05088-31-001-2016 -01122, donde se estableció el deber del accionado de reintegrar a su empleo al señor Echavarría Lopera con el pago de salarios y demás beneficios laborales, decisión que además señaló el valor del salario con que operaría la orden de reintegro. Atendiendo a esta orden aspira se libre mandamiento de pago por la suma de \$92'367.730 que corresponde a los salarios, prestaciones sociales y derechos laborales causados entre el 8 de junio de 2015 hasta el 5 de julio de 2022 (fecha del cálculo para efectos de la ejecución), además de hacer efectiva la orden de reintegro y el pago de aportes al sistema pensional e intereses legales (artículo 1617 del CC). Súplica que acompañó de la solicitud de ejecución de medidas cautelares de embargo de recursos en diferentes entidades financiera y de bienes inmuebles de propiedad del ejecutado.

En providencia del 1° de diciembre de 2022 se libró mandamiento de pago a cargo de Wilson Hernando Zuluaga Aristizábal en favor de José Javier Echavarría por.

*a. Por la suma de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$15'478.862), por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y aportes al sistema de seguridad.*

*b. Por los intereses de mora que se causen a partir de la fecha de expedición del título ejecutivo, y hasta que el pago real y efectivo se verifique en su totalidad.*

Misma providencia en que accedió a la medida cautelar referente al embargo y retención de los recursos que el accionado llegare a tener en diferentes entidades bancarias. (Archivo N° 5)

Luego, la activa presentó recurso de apelación en contra del mandamiento de pago exponiendo que la decisión del A quo desconoce la obligación al pago de salarios que quedó consignada en la sentencia de segunda instancia, esto es los salarios mensuales a razón de \$886.000 mensuales entre el 8 de junio de 2015 al 31 de diciembre de 2020 y en adelante conforme al SMLMV, además insistió en el decreto y perfección de la medida cautelar de embargo y secuestro sobre los inmuebles de propiedad del ejecutado. (archivo N° 6), siendo remitido el trámite a esta corporación para desatar el recurso de apelación.

### **ALEGATOS**

Concedido el término que establece el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 la activa presentó escrito donde reitera los reproches expuestos en el escrito de apelación.

### **CONSIDERACIONES**

Corresponde a esta corporación resolver sobre los reparos propuestos contra el mandamiento de pago, aspecto que de cara al numeral 8 del artículo 65 del CPTSS es susceptible del recurso de alzada.

Pues bien. se encuentra por fuera de discusión que la condena que da lugar a esta ejecución se generó en sentencia del 14 de marzo de 2022 el proceso declarativo de radicado 05088-31-05-001-2016-01122 que estableció la obligación al reintegro laboral,

con la correlativa carga de satisfacer además los salarios, las prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social y derechos laborales causados desde el 8 de junio de 2015 hasta que se produjera la reinstalación.

Así las cosas, corresponde a esta corporación pronunciarse sobre los reparos propuestos por la pasiva que se concretan en la determinación de las obligaciones que se desprenden de la sentencia, al igual que la procedencia de las medidas cautelares en el trámite ejecutivo.

Sobre la existencia del título ejecutivo señala el artículo 100 del CPTSS que serán exigibles ejecutivamente toda obligación que esté contenida en una decisión judicial.

Descripción que revela los elementos mínimos que debe contener aquel documento o acto que se pretenda para cumplimiento a través del proceso ejecutivo laboral y que se sintetizan en tres aspectos primordiales a saber: 1) una obligación expresa, 2) clara y 3) actualmente exigible.

Se trata de requisitos que han de reunirse de forma conjunta y suficiente y a través de los cuales se decantan aquellos reclamos donde no se discute la existencia de una obligación, tampoco está en duda los sujetos obligado (s) y beneficiario (s), se tiene certeza en el monto adeudado y/o obligación debida, así como la fecha de exigibilidad. Reclamaciones donde es inane la discusión sobre la configuración de la obligación, pues tales elementos se establecieron con suficiencia en un documento que se presenta como base de recaudo.

Ahora bien, respecto a los requisitos expuestos, ilustrativa es la decisión de la Sala de Casación Civil de la CSJ del 24 de junio de 2021, donde se describió el contenido de los presupuestos del título valor, indicando que una **obligación es clara** cuando su contenido es inequívoco, no es oscuro y por tanto no es susceptible de interpretaciones disímiles. Define la **expresividad de la obligación** como la suficiencia de los términos en que se consigna sin que sea menester acudir a teorías o hipótesis, sino que es diáfana la manifestación del deudor en favor del acreedor. y en cuanto a la **exigibilidad**, consiste en la posibilidad de reclamar la satisfacción de la obligación dada la expiración del plazo o cumplimiento de la condición que mediaba para obtener su satisfacción.

Por otra parte, pertinente es mencionar que el carácter de obligatorio y vinculante de las decisiones judiciales no solo se contiene en su parte resolutive, en tanto la providencia comporta el escenario de exposición de premisas fácticas y jurídicas, así como su valoración y aplicación al caso concreto, con lo cual se construye una respuesta a las súplicas y argumentos de defensa de las partes, por tanto, el sentido de la decisión se desarrolla a lo largo de la providencia, no se halla exclusivamente en la parte motiva, ni puede restringirse a las expresiones que se utilicen, como un límite rígido que impida realizar interpretaciones que consulten el sentido de lo decidido.

Con estas premisas se descende al **caso concreto** donde se objeta el mandamiento de pago para que sea adicionado con la obligación de salarios causados desde el año 2015, consideración que comparte esta corporación en tanto la orden emitida por esta corporación estableció una continuidad en la relación laboral, asumiendo que el despido ocurrido el 7 de junio de 2015 no se produjo, seguido de la obligación del empleador Wilson Hernando Zuluaga de pagar los salarios y emolumentos laborales causados desde tal data

Ahora bien, pese a que la sentencia no cuantificó los salarios que se habían causado ello no implica que se hubieran desconocido, resaltando que la sentencia sí fue clara en establecer la forma como se daría cumplimiento a la orden de reintegro, particularmente fijó la base de retribución, estableció el hito inicial y claramente indicó que la liquidación que se realizaba por concepto de prestaciones sociales y vacaciones solo incluía aquello causado hasta el 31 de diciembre de 2021, al precisar: “Acumulado calculado hasta el 31 de diciembre de 2021, el que se sigue generando hasta que se perfeccione la reinstalación”

Así las cosas, se accede a la modificación solicitada, para que en su lugar se libre mandamiento de pago el que conforme a las súplicas de la activa corresponde a:

- \$ 75.859.412 por concepto de salarios causados entre el 9 de junio de 2015 al 5 de agosto de 2022.
- \$ 16.508.318 como prestaciones sociales desde el 9 junio de 2015 al 5 agosto de 2022
- Por costas procesales
- Como obligación de hacer se materialice el reintegro al cargo que ocupaba el actor.

- *Al pago de los aportes al sistema de seguridad social*

Sin que haya lugar a librar orden de pago respecto a los intereses de mora deprecados en tanto para los mismos no existe título que avale su imposición y reclamo vía ejecutiva.

En cuanto a la solicitud de medidas cautelares se verifica que la providencia del 01/12/2022 no contiene una decisión expresa referente a la relación de medidas cautelares que indicó el actor, resolviendo de forma parcial sobre su procedencia dejando un vacío sobre las demás, sin que se pueda establecer si correspondió a una omisión o una negativa respecto a las demás, así las cosas, sin que exista una decisión expresa que sea susceptible de un control por parte de este funcionario se remite el proceso al juzgado de origen para que se pronuncie sobre el particular.

En suma, toda vez que la forma de cumplir la obligación que ahora se ejecuta se encuentra determinada en la sentencia, la que establece que los conceptos ordenados se seguirán causando hasta la materialización del reintegro, consideraciones que no fueron tenidas en cuenta por el fallador de instancia al librar mandamiento de pago, se dispone su complementación, incluyendo la decisión respecto a todas las medidas cautelares que fueron solicitadas por el accionante.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, **LA SALA SEXTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, MODIFICA** la decisión apelada, disponiendo la continuidad del trámite ejecutivo por los conceptos contenidos en la sentencia del 13 de marzo de 2022 que se componen de la obligación de reintegro, aunado al pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, aportes al sistema de seguridad social en pensiones y costas procesales. Deberá además adicionarse el mandamiento de pago emitiendo una decisión respecto a la procedencia o no de las medidas cautelares solicitadas.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes en estados. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen para lo de su competencia.

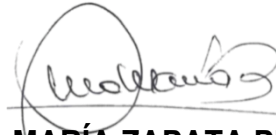
Los Magistrados,



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados publicados por medios digitales el 28 de marzo de 2023